

## MESA REDONDA SOBRE LA ATENCIÓN A DOMICILIO

# La Ley de Dependencia, un callejón en busca de una salida digna

## Administraciones públicas, empresas y representación sindical coinciden en que Castilla y León está bien posicionada, pero con necesidad de mejorar

✚ JESÚS DOMÍNGUEZ

A finales del año 2006 fue aprobada la que vino a ser llamada Ley de Dependencia, cuya nomenclatura completa habla de la «Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia». Con el estallido de la crisis, y por mor de la diferente interpretación presupuestaria de la norma que han llevado a cabo desde entonces el Gobierno central y cada comunidad autónoma, están dándose desequilibrios entre las posibilidades reales o necesarias existentes y la accesibilidad a los recursos de personas dependientes en las distintas regiones de España.

Sin embargo, Castilla y León se halla muy bien posicionada dentro del aparente callejón sin salida en el que, en ausencia de unas mayores partidas presupuestarias, lamentablemente parecen encontrarse las administraciones locales, que deben afrontar estos servicios sociales con el compromiso de atender a una ciudadanía cada vez más envejecida, con dos dificultades añadidas: la amplia superficie de la región y la vasta, y en algunos casos alejada, extensión del medio rural.

Esa es una de las principales conclusiones a las que llegaron diferentes agentes del sector asistentes a la mesa redonda celebrada en la hemeroteca de El Norte de Castilla, que llamó a la reflexión y a la autocrítica, puesto que todas las partes la hicieron a pesar del entendimiento de que, al menos en Valladolid, el trabajo que se está haciendo es impropio. Porque, como lamentaron los ponentes, resulta insuficiente todo cuanto se está haciendo, por más esfuerzo que estén poniendo de su parte.

Un buen ejemplo es el del Ayuntamiento de Valladolid, que estuvo representado por Rafaela Romero, concejala de Servicios Sociales del Consistorio, y quien explicó que ni siquiera el haber duplicado el presupuesto destinado para estas cuestiones y el hecho de haber aumentado la cifra de horas de los trabajadores que realizan dicha asistencia permite alcanzar a todos los

que la demandan.

No en vano, y a pesar del aumento de 2,6 millones de euros que ha habido en las partidas dedicadas a tal fin, que ha permitido un incremento de la intensidad de la asistencia y llegar a más personas, la lista de espera, como sucedió en el ejercicio anterior, continúa rondando las 700 personas, en parte, debido también a la entrada del Grado I de dependencia para la disposición de estos servicios. Así, aunque la oferta es mayor, la demanda continúa creciendo. «Nos encontramos desbordados porque somos incapaces de llegar a todos los que lo necesitan; cada vez la demanda es mayor, y es muy duro que fallezcan personas sin ser atendidas. Las partidas que recibimos para cubrir esta materia son muy limitadas, cuando este servicio debería ser universal, y no residual. Hoy en día el Ayuntamiento está asumiendo un 43% del coste de este servicio», recordó Romero, cuando, según el marco jurídico establecido, la asociación debería ser de un 10%».

### 28% de más de 65 años

Algo semejante le sucede a la Diputación de Valladolid, según explicó Conrado Íscar, delegado del área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales. «En la Diputación de Valladolid no hay listas de espera, pero ello supone que se esté desarrollando un gran esfuerzo. En zonas como en Tierra de Campos hay un 28% mayores de 65 años -que, por su edad, son personas que potencialmente pueden estar necesitados de este servicio-, por ejemplo, desde el 2015 hasta ahora han aumentado de 200 a 400 los mayores que han solicitado el servicio de comida a domicilio del que disponemos. A este paso va a llegar un momento en el que o bien tendremos que dejar de atender a otras personas o bien tendremos que dejar de hacer obras», advertía con un tono de lógica preocupación el diputado, que fijó el plazo de respuesta de la Diputación de Valladolid en solamente tres meses y en 650 los puestos de auxiliares cubiertos, a través de los cuales tratan de

responder a unas necesidades importantes con las dificultades añadidas del mundo rural, como por ejemplo a la hora de los desplazamientos entre los distintos lugares a donde deben acudir para atender a los solicitantes.

### 4.923 auxiliares

En total, en Castilla y León existen en la actualidad 4.923 auxiliares para atender a más de 26.000 pacientes, de lo que se extrae una media elevada

superior a los cinco pacientes por cada trabajador que hay. Y el «interés porque haya una mejora» debe empezar -como de hecho así lo hace- «por las administraciones locales», por un «foro aglutinador dirigido en dos direcciones: hacia que se lleve a cabo una mejora de la calidad de los servicios que se prestan y en dirección a una mejora de las condiciones de la auxiliar», opina Lourdes Herrero, secretaria general de Comisiones

Obreras de Construcción y Servicios de Castilla y León, que incide en el femenino, porque «si no el 100%, el 99% de quienes se dedican a estos servicios son mujeres».

Este debe en la calidad está más que de sobra detectado, y lo asumen las instituciones públicas en toda la medida que pueden, pero también se hace mediante la gestión que realizan entidades privadas, tal y como sucede con Clece. Su delegado de Servicios So-

José Manuel Millán  
Delegado de Clece

«Es un fracaso que haya familias que al final desistan del servicio»

«En el caso de Clece no hay manera de generar más empleo; existe una infrafinanciación»

ciales de la zona Noroeste, José Manuel Millán, opina que actualmente, y por requerimiento normativo, el auxilio y la figura del auxiliar son cuestiones que en Castilla y León están desde el año 2017 regladas, formadas y profesionalizadas, lo que indica que si los servicios no son mejo-



José Manuel Millán (Clece), Rafaela Romero (Ayuntamiento de Valladolid), Lourdes Herrero (Comisiones Obreras) y Conrado

res no es porque no haya una capacitación.

En el caso de Clece, desde comienzos del año 2000 vienen trabajando codo con codo con las mancomunidades para colaborar en solucionar esta problemática, aunque Millán percibe en ella la clara existencia de «una infrafinanciación», a pesar de los esfuerzos citados de entes públicos como pueden ser el Ayuntamiento o la Diputación. «Es un fracaso del sistema que haya familias que al final terminen por desistir del servicio porque cuentan con un apoyo de baja intensidad que les obliga a establecer turnos para los cuidados de la persona o incluso por no poder atenderla les termina obligando a tener que enviarla a una residencia, a un entorno que no es al aquel que pertenece. Es muy necesaria una mayor financiación», incide.

En este contexto de asistencia y de auxilio también

**Rafaela Romero**  
Ayto. de Valladolid

**«Pese al aumento de 2,6 millones de euros para estos servicios, estamos desbordados»**

**«La colaboración entre lo público y lo privado no puede estar demonizada»**

se requiere «que la colaboración entre lo público y lo privado no puede estar demonizada», apela Rafaela Romero, puesto que es «más importante» pensar «en la calidad del servicio que se presta y en la del trabajo».

Parece evidente, llegados a este punto, que en materia

de dependencia se precisa una mayor concienciación y una inversión más elevada por parte de instituciones mayores, tanto por parte de la Junta de Castilla y León como de los fondos del Gobierno central. Esa mayor asunción de un problema que existe, y que sufren muchas familias, debe darse porque, tal y como recuerda Lourdes Herrero, en ocasiones se dice que este servicio social es «algo caro», cuando el promedio del salario anual es menor de 14.800 euros, de los que, como resulta lógico, hay que detraer aquellos que van a parar a las propias arcas estatales por la necesidad de cumplir con las diferentes obligaciones para con ellas.

#### Mucho por hacer

Al mismo tiempo, en materia de regulación, de hecho queda aún «mucho por recorrer», puesto que en los últimos dieciocho años se han fir-

**Lourdes Herrero**  
Comisiones Obreras

**«El interés por la mejora debe comenzar en las administraciones locales»**

**«Debería existir un foro dirigido hacia la mejora de la calidad del servicio y del empleo»**

mado solo tres convenios colectivos, y el último ha sido dos veces prorrogado en dos ocasiones. «La recuperación y los beneficios», a su juicio, «están tardando demasiado en llegar a estos servicios, y es necesario que lo hagan para redundar en la calidad y en el empleo digno».

«En nuestra región hemos avanzado, pero debemos seguir mejorando en esta materia», valora, e invita a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León a liderar un diálogo y una coordinación para que se puedan favorecer esos avances tan necesarios a ojos de tantos y que sufren al final tantas familias. No en vano, a día de hoy existen en nuestra comunidad 22 tipos de contrato diferentes, y no el idílico convenio-marco.

Para José Manuel Millán es una preocupación que no se esté prestando la suficiente atención a lo que considera «un servicio indispensable» y en el que, sin más medios, resulta difícil generar mayor empleabilidad y aumentar la intensidad de esos servicios. «En el caso de Clece, no hay manera de generar más empleo; contamos con una media de la jornada laboral de un 83% de los trabajadores entre semana, y los fines de semana esa media es todavía más baja», manifestó, lamentando «una deriva de un servicio indispensable que impide atacar a la despoblación por los dos lados: asegurando la permanencia del asistido en su propio domicilio o dentro de lo que considera su entorno natural o familiar y por medio de la necesaria mayor generación de empleo».

De esta manera, y según los datos que ofreció, por cada millón de euros que se destina a estos servicios se generan 50 empleos, de los cuales hasta un total de 450.000 vuelven a las administraciones, a lo que conviene sumar el hecho de que las subastas que hacen algunas administraciones locales acostumbra a bajar el precio medio de 16,69 euros por cada hora de trabajo. Al mismo tiempo, esa apuesta por lo 'low cost' suele reducir la calidad de la asistencia.

#### Reflexión necesaria

Con todo, las proyecciones demográficas indican que en 2050 el número de mayores de 80 años va a multiplicar por dos las cifras actuales, y la inversión realizada hoy en día por parte de las distintas administraciones no va, ni de lejos, en consonancia con ese envejecimiento palpable de la población.

Ciertamente, la calidad de vida actual difiere de la de antaño y la salud de las generaciones que tendrán esa edad para entonces suele ser mejor, como lo es también la esperanza de vida. Lo que no es obstáculo para que deba abrirse una «reflexión a nivel estatal», considera Rafaela Romero, concejala de Servicios Sociales de Valladolid, sobre el trato que se le está concediendo a la Ley de

**Conrado Íscar**  
Diputación de Valladolid

**«En la Diputación no existen listas de espera, pero ello supone un gran esfuerzo»**

**«Desde 2015, los solicitantes de la comida a domicilio han pasado de 200 a 400»**

Dependencia. «Habría que empezar por un marco único; por una ley de servicios sociales estatales que garantizara la calidad del servicio» desde aquellas dos vertientes ya citadas, tanto del auxiliado como del auxiliar, que hoy en día trabaja frecuentemente en situación precaria o, bien en ocasiones, incluso lo hace formando parte de la economía sumergida del país.

Sin embargo, Lourdes Herrero, representante de CC OO, va más allá: «Es necesario no solamente pararse a reflexionar y sacar conclusiones, sino también intervenir con hechos y con realidades. En Valladolid, por ejemplo, hay precariedad y un promedio bajo de auxiliares con jornada completa».

«Quizá por imposibilidad», concedió a las instituciones presentes, cuya labor tuvo a bien reconocer sin ambages, si bien ella detecta también, como los demás ponentes, que «la desertización de las zonas rurales podría frenarse con una mayor presencia de los derechos a estos servicios y con una mayor generación de empleo».

Aunque, quizá por desgracia de los cuatro ponentes, en el fondo todo el ansia de actuar —o al menos una buena parte— depende del Estado, como vino a recordar Conrado Íscar, diputado provincial: «Los ayuntamientos piden a las diputaciones, las diputaciones a las comunidades y estas al Gobierno central». Y mientras esa mayor ayuda no llega, esos entes próximos siguen afanándose en continuar con las mejoras para favorecer el envejecimiento activo o adaptarse a los próximos retos, como el poder adaptarse durante la siguiente década a las necesidades de los mayores titulados que seguramente tengan otros requerimientos diferentes a los actuales. «Aunque el sector en nuestro entorno más inmediato está en una buena línea, todavía es inmaduro y puede mejorarse», confirmaron casi al unísono los cuatro.



Íscar (Diputación Provincial de Valladolid) posan en la hemeroteca de EL Norte de Castilla. :: RAMÓN GÓMEZ